



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 183

Medellín, nueve (09) de agosto de dos mil veintidós (2022).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, procede a proferir la decisión correspondiente dentro del proceso ordinario promovido por **JUAN CAMILO CASTRILLÓN URREGO** contra **la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.**, identificado con numero de radicado **05001-31-05-022-2021-00246-01**.

A continuación, la Sala conformada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES como magistrado ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 049 de discusión de proyectos, adoptó la decisión que se consigna enseguida:

1. ANTECEDENTES

1. Presentó demanda el señor JUAN CAMILO CASTRILLÓN URREGO en contra de la compañía transportadora de valores PROSEGUR S.A., buscando que, previa declaración de una relación laboral entre las partes y, que el actor es beneficiario de la convención colectiva suscrita entre la demandada y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. "SINTRAVALORES", se condene a PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. al pago de los emolumentos establecidos en la convención colectiva, a la reliquidación de las cesantías, el pago de la indemnización extralegal, la indemnización por despido injusto, la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T y las costas del proceso.

2. Trabada la litis, y fijada fecha para la continuación de la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el apoderado de la parte demandante, presentó memorial el 03 de marzo de 2022, solicitando cambiar los testigos pedidos en la demanda, ante la imposibilidad de contactarlos, presentando 3 testigos nuevos.

3. En la continuación de la audiencia de conciliación, excepción previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, realizada el 11 de marzo de 2022, el Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, se abstuvo de decretar como prueba la declaración de los nuevos testigos solicitados.

4. Contra la anterior decisión el apoderado del demandante, presentó recurso de apelación, argumentando que el proceso fue propulsado hace 4 años, por lo que no le resulta fácil a un trabajador que ha sido intermediado, requerir las pruebas por las cuales quiere hacer valer su derecho, resaltando que la jurisprudencia Colombiana, le ha dado mayor valor a la prueba testimonial de quienes han presenciado la prestación del servicio; esa es la razón de ser de este proceso, y si bien es cierto que existe una norma procesal que obliga a traer todos los testigos al momento de presentar la demanda, sin embargo, resulta un hecho protuberante, del que el actor no es culpable, que los testigos durante 4 años tengan alguna movilidad, y se vayan de los sitios, como en este caso ya que parecen están fuera del país, y son personas muy difíciles de contactar. Si bien el debido proceso debe garantizarse a las partes, en nada afecta a la contraparte sí está segura de que tiene las pruebas suficientes, de que venga un testigo y declare o diga, o plantee o lo que sea conveniente, debiendo prevalecer el derecho sustantiva sobre el procesal, para que la justicia como tal, establezca la finalidad de lo que se pretende en la litis, con las pruebas idóneas y necesarias.

2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

La doctora Viviana Sanabria Zapata presentó alegatos en nombre de Prosegur de Colombia S.A., sin embargo, no aportó el poder que la acredita como apoderada de la entidad.

3. CONSIDERACIONES

Quid Juris. – El tema radica si está el juez, obligado a decretar un medio probatorio no solicitado oportunamente por las partes.

1.- Las normas que regulan el tema de la petición de prueba en el procesal laboral y de la seguridad social, lo son los artículos 25 y 31, sendas normas modificadas en su orden por los artículos 12 y 18 de la ley 712 de 2001 y reforma de la demanda (art.93 del CGP).

De lo anterior se concluye, que la carga inicialmente de la prueba radica en las partes conforme al art. 167 del CGP integrado a este asunto por disposición del art. 145 del estatuto procesal laboral, para lo cual se señaló por el régimen procesal laboral, diversas oportunidades legales con las que cuentan para la solicitud pertinente.

El artículo 60 de la misma reglamentación procesal, exige al operador que para proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo- **regla técnica de la necesidad de la prueba**-; además, esta norma contiene la obligación de decretarlas y practicarlas oportunamente, en **síntesis**, para que sea considerada legalmente como tal, debe agotar las siguientes etapas fundamentales: Petición, decreto y práctica, como bien se sostuvo en la SL 9063/14.

2. En el derecho probatorio existen unos principios que son importantes destacar, uno de ellos es el de la Eventualidad o preclusión, la cual deriva en que Las actuaciones judiciales, tanto, para el juzgador como para las partes están previamente establecidas en la ley, de lo cual se infiere, que no es dable a las partes, incluso al juez, desconocer los términos perentorios que establece la ley; ya que bien es sabido desde vieja data, que el derecho procesal es derecho público, sus normas son aquellas las cuales el interés general impele que se cumplan obligatoriamente.

3.- El art. 29 de la Carta Política, regula el tema del debido proceso, sobre este tema la C-583 de 2016, señaló lo siguiente:

*"5.1. Según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corte, el derecho a acceder a la justicia tiene un significado múltiple. Entre otros, **se ha reconocido que este derecho fundamental comprende contar, al menos, con procedimientos idóneos y efectivos para la***

determinación legal de derechos y obligaciones;[42] *con que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas;*[43] *y contar con decisiones judiciales que sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso.”*

Se debe señalar que, el derecho de contradicción y defensa es consustancial a la naturaleza del derecho procesal, que no es más, que permitir a las partes en el proceso, conocer desde el inicio, los fundamentos facticos, jurídicos y en especial las pruebas que se van a llevar al proceso, para que así las partes no sean sorprendidas dentro del juicio.

CASO CONCRETO:

Del documento obrante en el archivo 04 del expediente digital, se percibe por esta colegiatura, que el apoderado judicial del actor en fecha 03-03-2022, allegó al expediente escrito petitorio, aduciendo imposibilidad de contactar los testigos previamente citados en la demanda, con el fin de que se decretaran por el A-quo los testimonios de los señores Alejandro Colorado Rojas, Diego Alejandro Sánchez Gómez y Jonatan Arcila Vasco; es importante destacar, que dicha solicitud fue realizada antes de la continuación de la audiencia del art. 77 del CPT y SS, que lo fue el día 11-03-2022; no es de recibo por parte de la corporación, lo alegado por la parte actora en el sentido, de haber transcurrido largo tiempo en este proceso desde el inicio de la demanda hasta la fecha de celebración de la continuación de la audiencia del art. 77 del procesal laboral y SS, ello no le da ninguna posibilidad legal de quebrantar las normas pertinentes a la solicitud de prueba; por otro lado, no le asiste razón al apelante en su manifestación que no afecta el derecho de defensa y contradicción del demandado, es bueno preguntarse si el hecho de presentarse la solicitud sólo a escaso 7 días de la audiencia del decreto de prueba, no se constituye en un acto de sorpresa para la parte accionada, que no tuvo la oportunidad de examinar la prueba solicitada y pronunciarse en la respuesta de la demanda; este hecho, da pie a la colegiatura para sostener que se está en presencia del potencial desconocimiento del derecho de defensa del demandado.

Como Corolario, el hecho de que el accionante solicitara el decreto de un medio de prueba, en este caso testimonial, fuera de los términos de ley, conduce a sostener que le asiste razón al A-quo al negar la solicitud, que es la causa del

Radicado No. 05001-31-05-019-2018-00488-01

recurso de apelación; con fundamento en lo expuesto, se confirmará la providencia.

Costas en esta instancia a cargo de la demandada apelante. De conformidad con el acuerdo PSAA16-10554 las agencias en derecho se fijan en un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000).

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE, la decisión proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el día 11 de marzo de 2022, por lo expuesto en la parte considerativa.

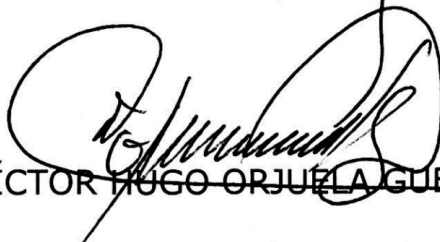
SEGUNDA: Costas en esta instancia a cargo del señor JUAN CAMILO CASTRILLÓN URREGO. De conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 las agencias en derecho se fijan en un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000).

Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los magistrados,



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por Estados No. **140**
del 10 de agosto de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>